

LA EUROCÁMARA INSTA A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS A AYUDAR A LA HIJA DE UN FUSILADO

N. Junquera / M. J. Albert

“Pido justicia al Parlamento Europeo porque en España no me la dan. Pido justicia para un hombre bueno, honrado, que no hizo daño a nadie. Gracias”.

Lo dijo, con la voz rota por la emoción, una mujer de 75 años llamada Anselma Guillermina Gómez. La escuchaban, en Bruselas, un grupo de europarlamentarios en la comisión de peticiones del Parlamento europeo, a la que Anselma había acudido para solicitar que instaran a las autoridades españolas a ayudarle a saber qué ocurrió y dónde está enterrado su padre, Anselmo Gómez, natural de Posadas (Córdoba), fusilado al inicio de la Guerra Civil.

Anselma Guillermina no le conoció porque nació después de que la familia recibiera la última carta de su padre, el 19 de agosto de 1936. Desde hace años, ayudada por su hija, Noelia Camacho, investiga qué le ocurrió. Han averiguado mucho. Por ejemplo, que le habían puesto en el punto de mira antes de empezar la Guerra Civil. En su última intervención pública, en los actos por el 1 de mayo de 1936, le estaban vigilando. “Estaba ya fichado como miembro activo del socialismo y por esa razón un día antes de estallar la guerra, el 17 de julio de 1936, lo convocaron por carta para que se presentara ante las autoridades en Córdoba capital”, dice Noelia. Cuando los hermanos de Anselmo fueron a verle a la cárcel, en agosto, les dieron su reloj y les dijeron que había muerto.

“Nunca supimos cómo lo mataron ni dónde está enterrado y ese ha sido el gran drama de mi madre, que nunca lo conoció”, insistió Noelia ante los europarlamentarios. La nieta de Anselmo Gómez explicó que llevaban “muchísimo tiempo buceando en archivos” y que así habían averiguado que en 1942 y 1943 “las autoridades militares y judiciales se pusieron en contacto el Ayuntamiento para pedirle información económica sobre sus bienes. ¡Ellos ya sabían que mi abuelo estaba muerto!”. El objetivo de esos informes era requisar sus bienes. Y así lo hicieron. A su viuda e hija les quitaron la casa familiar.

La familia solicitó al juzgado de Posadas ese expediente, pero el juzgado no respondió. “Por eso estamos aquí. Por el derecho a la información”, reclamó Noelia a los europarlamentarios. La familia pidió a la Eurocámara que instase a las autoridades españolas a suscribir el convenio del Consejo Europeo sobre acceso a documentos oficiales — “para que en todos los archivos de España se siga una política común, porque hay archivos que te tratan muy bien y otros que te ignoran”—; y a que elaboren un plan de identificación de los restos de las fosas comunes. “No me gustaría que mi madre muriera sin localizar a su padre. Es una herida abierta que ustedes pueden contribuir a cerrar”, concluyó Noelia.

Luis Yáñez, del PSOE, apoyó la petición: “No es un tema de socialistas contra el PP, es un tema de justicia histórica”, dijo. “España es el país con más desaparecidos después de Camboya y las autoridades públicas no hemos sido capaces de satisfacer a esas familias”. El socialista Miguel Ángel Martínez aseguró que Anselma y su hija merecían el mismo trato que las víctimas de ETA.

Carlos Iturgáiz, del PP, confesó una preocupación: “Hemos abierto la puerta para que venga gente buscando familiares de la primera guerra mundial o las invasiones turcas en Chipre...” y la europarlamentaria danesa Margaret Auken, de los Verdes, aseguró que lo que había ocurrido con Baltasar Garzón le “reventaba”, y sugirió a la comisión que invitaran al exjuez a hablar sobre las víctimas del franquismo.

Finalmente, la comisión acordó instar por escrito a las autoridades españolas a que facilite a Anselma la investigación sobre el paradero de su padre. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recibirá pronto su carta.